Imprimir

Tres tendencias conforman el espectro político de Colombia: uno, la *ultraderecha (los irracionales)* compuesta por el Centro Antidemocrático, Cambio Radical y el Mira; la *derecha (los desconfiables)* por conservadores, liberales, la U, parte de la Alianza Verde y otras colectividades como el Frente Amplio que promueve Roy Barreras, y Dignidad de Fajardo y Robledo; y los *progresistas (los racionales)*, una fuerza de centro izquierda que tiene más de nueva izquierda que de centro, la conforman el Pacto Histórico y otras agrupaciones que deberán sumarse antes de las primarias de octubre de 2025.
De esta manera, el mapa político colombiano está conformado por el bloque *progresista* y por el bloque de los *irracionales* y los *desconfiables* considerando que conservadores, liberales y la mitad de los verdes se han unido al uribismo para oponerse al gobierno progresista, sumando mayorías en el Congreso de la República y mayorías en las politizadas Cortes, que no son magistrados independientes, como debería ser, sino togados de talante conservador que deciden según su vetusta ideología en contra de ciudadanos y campesinos y en contra de la idea de una nación que debe pacificarse para desarrollarse.

Así las cosas, no es posible uniones confiables entre progresismo y oposición, porque para *los irracionales* primero está la captura del Estado vía corrupción y una idea de feudalismo macabro y perpetuo.

De esta manera, *irracionales y desconfiables* son en Colombia una sola descomposición detrás de la captura del Estado por un fatídico y fallido modelo neoliberal que aleja a Colombia de una frontera deseable de desarrollo.

La ideología aparece cuando se trata de arrasar con los campesinos y con los derechos de los pobres y de la clase media, lo demás son estrategias agazapadas de captura del Estado vía elecciones que deriva en una “antidemocracia representativa”, porque la democracia representativa tiene una falla estructural irreparable considerando que los tres poderes han hecho lo que quieren, ahora más con la Constitución de 1991.

Con esta Constitución, bajo el artificio de la independencia de los tres poderes y la

colaboración armónica en un supuesto equilibrio de poderes, para lo cual cuentan con unos organismos de control a su servicio que también se creen autónomos por eso cada cual opina y decide en contrario al gobierno progresista, caso de la Registraduría, que se dice "autónoma" para decidir contra la consulta popular aduciendo que hay profundas divergencias jurídicas sobre el proceso y la constitucionalidad de la consulta a la sociedad. Es decir, todas las agencias del Estado son "autónomas". Todas tienen "presidentes" y todas creen que son repúblicas independientes que gobiernan a Colombia con el único propósito de obstruir al progresismo y destruir a la nación.

De tal manera, el *progresismo* con el Pacto Histórico, tiene la obligación de unir todas las fuerzas democráticas posibles, y debe superar barreras por la manera como está enfocada la acción de *los irracionales y de los desconfiables*: todos contra el progresismo, por lo cual cualquier intento de unidad fracasa porque a la oposición la controlan los primeros. Entonces, no puede haber acuerdos con el progresismo puesto que las distancias políticas e ideológicas son abismales y su aproximación es casi que imposible, incluso, ni para un proyecto de paz total, porque *los irracionales* abrazan y viven de la violencia, incluso inventan atentados contra sus líderes. La vileza contra el senador Uribe Turbay, les salió mal, y con las marchas quedo claro que los *irracionales* y los *desconfiables* son idénticos.

En caso que los *desconfiables* se unan con los *progresistas* – como ocurrió en Alemania para bloquear a la ultraderecha, o entre el PSOE y el PP en España para la renovación del Tribunal Constitucional sin tener en cuenta a VOX (ultraderecha) – ¿qué acuerdos estratégicos y pragmáticos serían posibles? ¿qué los uniría o convocaría del progresismo y qué van a pedir a puerta cerrada? porque el Estado es la torta de acumulación de los *irracionales* y de los *desconfiables,* y de uno que otro infiltrado en el *progresismo*. Los políticos de la oposición y los empresarios lo tienen claro: se agranda el Estado, se agranda la torta, se agranda la corrupción, se agranda la ilegalidad, se agrandan los negocios, y se desbaratan las instituciones para capturar el Estado y no para dirigir a la nación a largo plazo.

Entonces, el centro y la derecha se hubieran podido unir a favor de más reformas progresistas, porque estas son, no otras, las que están en el plan nacional de desarrollo

producto del plan de gobierno que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Desconocer esto hace casi que imposible los acuerdos para las reformas, porque estas deben tener talante progresista, y no uribista, godo y de un mal liberalismo. Además, ha terminado el período de las reformas neoliberales de 1991 a 2022, porque han sido reformas bajo la idea de un Estado de derecho donde el poder maneja el Estado a través de leyes según sus intereses (Constitución de 1886). Pero, el período de las reformas progresistas recién ha comenzado, y son coherentes con un estado social de derecho, es decir, donde la gente cuenta y decide: es el poder del pueblo.

El progresismo de Galán, de López Pumarejo, y Lleras Restrepo pasando por Gaitán, murió a las tres de la tarde del 7 de agosto de 1970. Desde ahí Colombia acabó de desmadrarse, porque el pacto del Frente Nacional entre liberales y conservadores fue secreto y traidor de las fuerzas campesinas por eso surgieron las FARC y otras insurgencias, y lo que vino desde el gobierno de Misael Pastrana fue la destrucción de las ideas, la eliminación de fuerzas progresistas y de izquierda, y el periodo que no termina de la ilegalidad y la violencia neoliberal. Son 45 años de ilegalidad, conservadurismo irracional, de economía de mercado, y de descomposición social e institucional.

Hay una tremenda ruptura institucional. El poder nunca pensó que podría agotarse y que llegaría algo nuevo. Entonces, estamos en una transición entre lo viejo que no quiere irse y lo nuevo que está llegando. Y en esa transición debe haber acuerdos pragmáticos para pasar reformas e implementar políticas progresistas del siglo XXI, y así llegar limpios a las elecciones a dar el debate de las nuevas ideas contra el pasado que dejó un millón de asesinados y desaparecidos desde la Masacre de las Bananeras, y la tercera sociedad más desigual del planeta. Este último no es un dato cualquiera sino el reflejo de un poder obsesionado con la acumulación y tasas de ganancia intocables, tema que no hace parte de las discusiones políticas y académicas. Por eso cualquier reforma social les parece cara e inconveniente.

Avanzando, el desmadre institucional es total, por lo cual debe convocarse a una asamblea nacional constitucional, porque ni siquiera entre los tres poderes hay un acuerdo jurídico

sobre cómo adelantar la consulta popular, lo cual demuestra que las leyes están mal hechas, y por tanto está mal pensada la estructura de los tres poderes por sus pactos escondidos. Son como haciendas de instituciones del Estado unidas por cruzados intereses particulares y no para construir la gran nación. Ya ni los magistrados se posesionan ante el presidente de la república. El Estado está roto, y lo rompió la oposición de *irracionales* y *desconfiables*.

Tampoco los tres poderes están de acuerdo con unas reformas sociales para tener un avance en equidad, justicia social, desarrollo y bienestar. Tuvo el presidente que llamar al pueblo para que avancen la consulta popular y la reforma laboral, y tendrá que seguirlo llamando porque la Registraduría, el Consejo de Estado, y el presidente del Senado se unieron para bloquear la consulta popular, cuando es la Corte Constitucional la que debe decidir sobre la constitucionalidad de las decisiones del Ejecutivo en materia de consulta al pueblo soberano.

El sistema de justicia el cual se muestra como si fuera una divinidad superior, no ha podido, luego de trece años, cerrar el juicio con el líder de la ultraderecha, porque el deshonroso expresidente, con fiscales de bolsillo, decidieron en un comienzo dinamitar el proceso con abominables mañas para dilatarlo y lograr la prescripción de unos delitos producidos en su delirio de poder y maldad contra un honorable senador de la república. Cuando el juicio acabe, Colombia debe rendir un gran homenaje a las víctimas y a las valientes e inteligentes juezas que con justo criterio jurídico han impedido un abuso más de ese innombrable personaje de baja estatura física, ética e ideológica.

El presidente Petro y los progresistas deben continuar con la gente en la calle y en las plazas. Las elecciones del 2026 se ganan con la defensa del gobierno progresista, y la voz de una sociedad y de unos pensadores que deben sumergirse en la construcción de una idea propia del nuevo proyecto político, porque de *los irracionales* nada bueno se puede esperar y de *los desconfiables*, poco.

Jaime Acosta Puertas